



## CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS

VIRIATO, 52	28010 MADRID	914 44 49 20
PONZANO, 15	28010 MADRID	914 44 49 20
G. DE GRÀCIA, 171	08012 BARCELONA	934 15 09 88
ALBORAYA, 23	46010 VALENCIA	963 61 41 99

[www.cef.es](http://www.cef.es)

[info@cef.es](mailto:info@cef.es)

## Índice Tema 5

1. La Administración Pública: principios constitucionales informadores.
  - 1.1. Introducción.
  - 1.2. Principios constitucionales informadores.
    - 1.2.1. Principios de actuación.
    - 1.2.2. Principios de organización.
2. La Administración Central del Estado: los órganos superiores de la Administración General del Estado.
  - 2.1. Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.
  - 2.2. La organización administrativa.
    - 2.2.1. Órganos administrativos.
    - 2.2.2. Órganos superiores y órganos directivos.
    - 2.2.3. Elementos organizativos básicos.
  - 2.3. Los Ministerios y su estructura interna.
    - 2.3.1. Los Ministerios.
    - 2.3.2. Organización interna de los Ministerios.
    - 2.3.3. Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas.
    - 2.3.4. Ordenación jerárquica de los Órganos Ministeriales.
  - 2.4. Órganos superiores de los Ministerios.
    - 2.4.1. Los Ministros.
    - 2.4.2. Los Secretarios de Estado.
  - 2.5. Órganos directivos de los Ministerios.

- 2.5.1. Los Subsecretarios.
- 2.5.2. Los Secretarios Generales.
- 2.5.3. Los Secretarios Generales Técnicos.
- 2.5.4. Los Directores Generales.
- 2.5.5. Los Subdirectores Generales.
- 3. Órganos territoriales. Los Delegados y Subdelegados del Gobierno.
  - 3.1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
    - 3.1.1. Nombramiento y cese.
    - 3.1.2. Sustitución.
    - 3.1.3. Naturaleza.
    - 3.1.4. Dependencia.
    - 3.1.5. Funciones.
    - 3.1.6. Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno.
  - 3.2. Los Subdelegados del Gobierno.
    - 3.2.1. Nombramiento y cese.
    - 3.2.2. Funciones.
  - 3.3. Los Directores Insulares de la Administración General del Estado.
    - 3.3.1. Lugar.
    - 3.3.2. Dependencia.
    - 3.3.3. Nombramiento y cese.
    - 3.3.4. Competencias.
  - 3.4. Estructura de los servicios periféricos.
    - 3.4.1. Simplificación de los servicios periféricos.
    - 3.4.2. Estructura de las Delegaciones y de las Subdelegaciones del Gobierno.
    - 3.4.3. Criterios sobre integración de servicios.
    - 3.4.4. Criterios sobre organización de servicios no integrados y dependencia de éstos.



## CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS

VIRIATO, 52	28010 MADRID	914 44 49 20
PONZANO, 15	28010 MADRID	914 44 49 20
G. DE GRÀCIA, 171	08012 BARCELONA	934 15 09 88
ALBORAYA, 23	46010 VALENCIA	963 61 41 99

www.cef.es

info@cef.es

### TEMA 5

**La Administración Pública: principios constitucionales informadores. La Administración General del Estado: los órganos superiores de la Administración General del Estado. Órganos territoriales. Los Delegados y Subdelegados del Gobierno.**

#### 1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES INFORMADORES.

##### 1.1. INTRODUCCIÓN.

El Título IV de la Constitución se dedica al Gobierno y a la Administración. Dos concretos preceptos merecen especial atención. El primero de ellos es el artículo 97, según el cual: «El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las Leyes». El segundo es el artículo 103.1: «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho».

Ambos preceptos se inscriben en la línea de una concepción clásica del Estado y de la Administración de signo liberal y raíz hegeliana.

Si bien, en el plano político, la concepción que reflejan los artículos 97 y 103 es ortodoxa, en los términos del contexto democrático en el que la Constitución se sitúa, y no es susceptible de críticas mayores, no ocurre lo mismo en el plano técnico jurídico. Desde este punto de vista la redacción del artículo 103.1 es, en efecto y según Tomás Ramón Fernández, bastante desafortunada.

Dicho precepto olvida caracterizar desde el punto de vista jurídico a la Administración, que es, ante todo, una organización personificada. En cuanto organización, la Administración está constituida por un complejo de órganos adecuadamente vertebrados de acuerdo con unos determinados principios que aseguran su unidad y cohesión interna.

Debe destacarse, ante todo, que de un análisis del artículo 103 se llega a la conclusión de que el legislador constitucional ha visto la Administración Pública primariamente como una realidad política,



como una organización que lleva a cabo unas tareas determinadas. No se formula en dicho precepto ninguna declaración de personalidad jurídica. Ello no quiere decir que la Administración no tenga personalidad, significa que ésta no es la óptica predominante para los constituyentes. La Administración es, fundamentalmente, una organización que realiza unas tareas, sin perjuicio de que se predique luego su sometimiento a la Ley y al Derecho. Lo que se hace en este artículo es concretar para la Administración lo que ya estaba dispuesto para todos los órganos constitucionales por el artículo 9.º 1: «Los Poderes Públicos están sometidos a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico».

La Administración se somete, pues, al bloque del Ordenamiento Jurídico. Este Ordenamiento Jurídico está formado no sólo por las normas estatales (Leyes y Reglamentos) sino también por la costumbre, la jurisprudencia y de forma especial por los principios generales.

## 1.2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES INFORMADORES.

Al hablar de los principios constitucionales que informa la Administración Pública, debemos distinguir entre principios de actuación y principios de organización.

### 1.2.1. Principios de actuación.

Son los siguientes:

#### A) Objetividad.

El artículo 103.1 establece que «la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales». Esto significa que los objetivos de la Administración Pública no pueden ser distintos al interés general y que tales objetivos han de ser alcanzados mediante un comportamiento imparcial.

La objetividad de la Administración queda recogida también en el artículo 9.º 3 mediante la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, así como en el propio artículo 103, en su apartado tercero, al requerir que el estatuto de los funcionarios prevea determinadas garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

#### B) Eficacia.

Baena de Alcázar afirma que toda organización debe actuar de manera eficaz y sin atender a particularismos, y más aún la Organización Pública por excelencia, pero de aquí difícilmente pueden obtenerse deducciones que sirvan de instrumento de compensación del sistema constitucional en materia de Administración.

En tanto en cuanto la Administración tiene atribuido como fin la satisfacción de los intereses generales, la eficacia debe ser un elemento que presida su actuar. Este elemento se ha utilizado frecuentemente para afirmar el carácter neutral y apolítico de la Administración. Viene expresamente recogido en el artículo 103.1 de la Constitución.

Como dice Jorge de Esteban, el principio de eficacia es el que más difícil plasmación jurídica presenta al objeto de posibilitar la sanción de una posible actuación administrativa ineficiente. De todas formas, también puede eventualmente la Administración incurrir en responsabilidad por la inefica-

cia de una actuación obligada suya, por lo que no cabe reducir el criterio de eficacia impuesto por la Constitución a una mera aspiración.

#### C) Participación de los ciudadanos.

La participación de los ciudadanos no es sino una plasmación concreta del principio general admitido por la Constitución en el artículo 9.º 2, al afirmar que «corresponde a los poderes públicos... facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social», e igualmente en el artículo 1.º 1 al establecer que: «España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho» uno de cuyos postulados es la participación democrática de los ciudadanos.

Esta participación, por tanto, debe manifestarse en el ejercicio de la función administrativa lo cual permite que se plasme en numerosos procedimientos administrativos. De esta forma, el artículo 105 prevé la participación de los ciudadanos tanto en el procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas de carácter general, como en el de los actos administrativos, así como el acceso a archivos y registros administrativos.

#### D) La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Según el artículo 3.º 2 de la LOFAGE, son principios de funcionamiento de la Administración los siguientes:

- a) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
- b) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
- c) Programación y desarrollo de objetivos y control de la gestión y de los resultados.
- d) Responsabilidad por la gestión pública.
- e) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
- f) Servicio efectivo a los ciudadanos.
- g) Objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
- h) Cooperación y coordinación con las otras Administraciones Públicas.

Según el artículo 4.º de la citada Ley debe regir, igualmente, el principio de servicio a los ciudadanos, con arreglo a estos criterios:

- a) La efectividad de sus derechos cuando se relacionen con la Administración.
- b) La continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas fijadas por el Gobierno y teniendo en cuenta los recursos disponibles, determinando al respecto las prestaciones que proporcionan los servicios estatales, sus contenidos y los correspondientes estándares de calidad.

La Administración General del Estado desarrollará su actividad y organizará las dependencias administrativas y, en particular, las oficinas periféricas, de manera que los ciudadanos:

- a) Puedan resolver sus asuntos, ser auxiliados en la redacción formal de documentos administrativos y recibir información de interés general por medios telefónicos, informáticos y telemáticos.
- b) Puedan presentar reclamaciones sin el carácter de recursos administrativos, sobre el funcionamiento de las dependencias administrativas.

Todos los Ministerios mantendrán permanentemente actualizadas y a disposición de los ciudadanos en las unidades de información correspondientes, el esquema de su organización y la de los organismos dependientes, y las guías informativas sobre los procedimientos administrativos, servicios y prestaciones aplicables en el ámbito de la competencia del Ministerio y de sus organismos públicos.

### **1.2.2. Principios de organización.**

Son los siguientes:

#### **A) Jerarquía.**

A pesar de que a primera vista parece tratarse de una idea de contornos definidos, nuestro concepto actual es el resultado de la refundición de puntos de vista provenientes de diversas épocas.

A partir del siglo XIX, el concepto de jerarquía va a implicar:

1. Existencia de unos órganos complejos, ya que sólo en el seno de éstos pueden darse relaciones entre titulares de los órganos menores.
2. Distribución de tipos de tareas según los distintos escalones jerárquicos, cuestión íntimamente ligada con la competencia.
3. El distinto valor jurídico que se otorga a los actos de órganos situados en distintos escalones jerárquicos.
4. Corriente de información que suministran los órganos inferiores a los superiores, y de instrucciones y criterios de actuación que proporcionan los superiores a los subordinados.

Parece ser éste el contenido de la idea que como principio se predica por la Constitución.

Entrena Cuesta define la jerarquía administrativa como «aquella especial estructuración que se efectúa de los distintos órganos de un mismo ramo de la Administración dotados de competencia propia, mediante su ordenación escalonada, en virtud de la cual los superiores podrán dirigir y fiscalizar la conducta de los inferiores, resolviendo, en su caso, los conflictos entre los mismos, al objeto de conseguir la unidad en la actuación de todos ellos».

García de Enterría cree que lo que caracteriza a la Administración de modelo napoleónico, como es la española, es precisamente la cadena de agentes jerarquizados.

Como escribe Entrena Cuesta, es la técnica más antigua empleada para reducir a unidad la multiplicidad de órganos. Su aspecto jurídico es de una importancia extraordinaria en toda organización como veremos.

En nuestro Derecho, la jerarquía implica las siguientes funciones:

- a) Ante todo, la posibilidad de dirigir, impulsar y fiscalizar a los inferiores.
- b) Dictar órdenes y fijar criterios para la ejecución de sus subordinados mediante, entre otros medios, circulares e instrucciones.
- c) Atribuciones de sanción derivadas de las de fiscalización citadas en el apartado a).
- d) Posibilidad de llevar a cabo el superior los nombramientos de los inferiores, cuando así esté previsto por la Ley.
- e) La resolución de los conflictos que se susciten entre órganos inferiores.
- f) A lo descrito, añade Entrena Cuesta que en ocasiones disponen los órganos superiores de la posibilidad de anular o reformar los actos dictados por los inferiores; de delegar en ellos el ejercicio de funciones; avocar para sí las que a éstas son atribuidas; o de sustituirlos en el ejercicio de dichas funciones.

#### B) Descentralización.

Para la doctrina española reciente, la descentralización consiste en el traspaso de funciones desde un ente administrativo (el Estado normalmente) a otros entes administrativos menores, siempre que ello implique la efectiva transferencia de poderes decisorios ejercidos en nombre propio por la entidad a cuyo tenor se hace la descentralización.

Si bien, hay que hacer una serie de advertencias a esta tesis, que si bien es la que se manejó en la interpretación del texto constitucional; éstas son:

1. Hay que diferenciar descentralización a favor de entes territoriales y la llamada descentralización institucional que responde a la clasificación de personas jurídicas públicas fundacionales.
2. Una segunda advertencia es tener en cuenta que al utilizar este vocablo se ha ido disociando el valor científico y el vulgar del término. Así, la descentralización territorial implica que no todas las decisiones de interés las adopta el Estado, pudiendo participar en ellas otros entes públicos.

Se entiende que un país está descentralizado cuando la atención de la mayor parte de los fines públicos están en manos de las personas administrativas distintas del Estado. Éste es el concepto estático.

Podemos definir la descentralización administrativa, desde un punto de vista dinámico, como el fenómeno en virtud del cual se transfieren competencias de la Administración del Estado a otros entes públicos con personalidad propia, o se aumenta de cualquier forma la posibilidad de que estos entes realicen eficaz y libremente dichas competencias.

Debe distinguirse entre una descentralización territorial y otra institucional. La primera se realiza a través de los entes locales y autonómicos, mientras que la segunda se efectúa a través de los entes institucionales.

La principal diferencia que media entre ambas formas de descentralización consiste en que la territorial toma como presupuesto la existencia de unos intereses peculiares de los entes locales y autonómicos, mientras que en el caso de la descentralización institucional, salvo en los entes de tipo corporativo (Colegios de Farmacéuticos, de Médicos, de Abogados, etc.), no concurren tales intereses peculiares, se trata tan sólo de una simple técnica para conseguir la agilidad administrativa en el desarrollo de determinadas funciones y descargar de su realización a la Administración Estatal.

Una parte de la doctrina afirma que hay que distinguir entre autonomía y descentralización.

Baena de Alcázar dice que la autonomía no consiste en un traspaso de funciones, generalmente del Estado a otro ente, en virtud de una voluntad política expresada por Ley ordinaria o Reglamento.

La autonomía rectamente entendida (y así parece que la entiende la Constitución Española de diciembre de 1978) consiste en que determinados entes públicos tienen unas funciones que cumplir, porque así lo ha establecido la fuente primigenia del sistema, es decir, la propia Constitución.

En consecuencia, aunque las ideas de descentralización y autonomía están emparentadas porque ambas implican un reconocimiento de competencias a los entes públicos menores situados dentro del Estado, también es cierto que se oponen en cuanto a su fundamento.

Ello significa que, toda vez que la Constitución reconoce autonomía a las entidades territoriales, municipio, provincia y Comunidad Autónoma (art. 137), el principio de descentralización no está aludiendo a esta realidad, sino a otra distinta. El problema consiste en averiguar cuál puede ser esta otra realidad.

Tres respuestas parecen claras a esta pregunta. De una parte, se está aludiendo a las posibles operaciones concretas de descentralización territorial. Junto a la consagración de autonomía de las entidades territoriales, que es el pivote central de la distribución de funciones entre entes públicos, la Constitución admite a través del principio del artículo 103, que algunas funciones estatales sean traspasadas mediante descentralización a los entes territoriales. Que esto no es una entelequia, se deduce del reflejo práctico de este principio en el número 2 del artículo 150, a tenor del cual el Estado puede transferir o delegar funciones en las Comunidades Autónomas. Éste es posiblemente el caso más claro de descentralización territorial previsto en la Constitución, aunque el legislador constitucional, junto a la descentralización, ha tenido en cuenta, alternativamente, la posibilidad más limitada y modesta de una simple delegación en la que él conserve la titularidad.

La descentralización podrá referirse a transferencia de funciones estatales a las locales, sin perjuicio de la que puedan realizar las Comunidades Autónomas en los entes locales.

También, y en la actualidad con mayor difusión, tiene lugar la descentralización institucional dado el «Estado social» definido en la Constitución, y por el campo de intervención pública que la Constitución ofrece.



### C) Desconcentración.

Se trata de que una de las aplicaciones posibles de la desconcentración administrativa consiste en el traspaso de competencias a órganos periféricos, lo que presupone la existencia de los órganos.

Hay que interpretar del artículo 103 que la Administración es una organización que junto al núcleo de sus órganos centrales se prolonga, de una parte, en órganos periféricos (desconcentración), y de otra, en personas jurídicas fundacionales (descentralización institucional).

Las atribuciones de unos órganos administrativos pueden ser alteradas con la de otros. Los órganos superiores pueden ver aumentado su círculo de atribuciones de manera permanente a costa del círculo o los círculos de atribuciones de los órganos inferiores; cabe, por el contrario, que los órganos inferiores reciban atribuciones que antes correspondían a los superiores. El primer fenómeno de cambio o alteración de las atribuciones se denomina concentración y el segundo desconcentración.

La concentración o desconcentración de las atribuciones deberá llevarse a efecto mediante la adopción de disposiciones de valor jurídico, idéntico a aquellas que habían establecido la distribución de atribuciones que se altera.

### D) Coordinación.

Rectamente entendido este principio, resulta de la complicación de las ideas de jerarquía y competencia. Consiste en la tarea de evitar superposiciones y fricciones de la competencia de los órganos situados en un mismo escalón jerárquico, lo que conlleva un planteamiento estático y otro dinámico.

Según el estático, hay que distribuir las tareas entre los órganos que hagan posible un funcionamiento medianamente racional y eficaz.

Según el planteamiento dinámico, hay que realizar tareas de solucionar conflictos y armonizar actuaciones de los órganos, que sólo se pueden llevar a cabo por quien tiene el poder.

Hay que interpretar la idea de coordinación dentro del artículo 103 como la voluntad de distribución y funcionamiento racional de la organización, lo que tiene consecuencias distintas según los campos a que se aplique.

La coordinación encuentra su campo de acción allí donde actúan las relaciones jerárquicas, y como sustitutivo de éstas han existido, pues, siempre entre los distintos ramos o Ministerios que componen la Administración del Estado. La importancia actual de los principios coordinadores no se refiere sin embargo únicamente a esta cuestión de relaciones entre los distintos Ministerios, sino también a las relaciones entre la Administración Central y los entes descentralizados; el movimiento descentralizador que confiere pluralidad de competencias a personas jurídicas distintas de la Administración del Estado, y no ligadas con éste, por tanto, por una relación jerárquica; hace que cada vez sean más necesarias las técnicas coordinadoras entre la Administración Central y dichos entes descentralizados.

### E) LOFAGE.

Según el artículo 3.º 1 de la LOFAGE, son principios de organización de la Administración General del Estado:

- a) Jerarquía.
- b) Descentralización funcional.
- c) Desconcentración funcional y territorial.
- d) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
- e) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
- f) Coordinación.

## **2. LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO: LOS ÓRGANOS SUPERIORES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.**

Dentro de la organización de la Administración Pública en España deben distinguirse cuatro familias perfectamente individualizadas:

1. La Administración del Estado.
2. La Administración Autonómica.
3. La Administración Local.
4. La Administración Institucional.

Dentro de la Administración del Estado, los órganos administrativos, atendiendo al ámbito territorial de sus funciones, pueden ser centrales o periféricos. Unos y otros pueden ser de existencia obligatoria, que es lo normal, o facultativa; este carácter facultativo tienen entre los centrales los Vicepresidentes del Gobierno, los Secretarios de Estado y los Secretarios Generales.

Atendiendo al ámbito material de sus funciones, en la esfera central son de competencia general el Consejo de Ministros, el Presidente y el Vicepresidente del Gobierno, y en el ámbito periférico, los Delegados del Gobierno y los Subdelegados. Todos los demás órganos tienen competencia especial, es decir, relativa a una parte tan sólo de la Administración.

Dado que el régimen jurídico del Gobierno y de sus miembros, en cuanto órgano superior de la Administración, ya se encuentra desarrollado en el Tema 12, a continuación se pasará a analizar la organización de la Administración del Estado en los niveles inferiores a éste.

### **2.1. LEY 6/1997, DE 14 DE ABRIL, DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.**

Los principios constitucionales recogidos en el artículo 103 hacían precisa una Ley que acometiera la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, para hacer posible los principios allí señalados y reordenar la organización administrativa atendiendo a la racionalidad y a la necesidad de evitar duplicidades en la gestión. El servicio a los ciudadanos exige que la estructura y planta de la Administración General del Estado se ajuste a la realidad social, y por ello debe reordenarse en función de los mismos.

Con esta finalidad, se aprobó la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Consta de:

- Título Primero (disposiciones generales).
- Título II (Administración General del Estado).
- Título III (Organismos Públicos).
- Título IV (De las competencias y procedimientos en materia de organización).

Tiene 67 artículos, 17 disposiciones adicionales, 3 transitorias, 1 derogatoria y 2 finales.

Esta Ley ha derogado: la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957, la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, de 16 de agosto de 1983 (aunque respecto a estas Leyes, algunos artículos continúan en vigor hasta que salga la nueva Ley que regule el Gobierno); la Ley de Entidades Estatales Autónomas, de 26 de diciembre de 1958, la Ley sobre Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas de 16 de noviembre de 1983 y la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 (excepto el Capítulo Primero del Título VI, referido al procedimiento de elaboración de disposiciones generales, con excepción del apartado 2 del art. 130 que queda derogado).

## 2.2. LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

### 2.2.1. Órganos administrativos.

El artículo 5.º de la LOFAGE dispone que:

- a) Los órganos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos se crean, modifican y suprimen conforme a lo establecido en la LOFAGE.
- b) Tendrán la consideración de órganos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.

### 2.2.2. Órganos superiores y órganos directivos.

La organización de la Administración General del Estado responde a los principios de división funcional en Departamentos Ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, salvo las excepciones previstas en la LOFAGE.

En la organización central son órganos superiores y órganos directivos:

#### A) Órganos superiores:

- a) Los Ministros.
- b) Los Secretarios de Estado.

B) Órganos directivos:

- a) Los Subsecretarios y Secretarios generales.
- b) Los Secretarios generales técnicos y Directores generales.
- c) Los Subdirectores generales.

En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general.

En la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos los embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales.

Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los Subdirectores generales y asimilados.

Todos los demás órganos de la Administración General del Estado se encuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o directivo.

Los estatutos de los organismos públicos determinarán sus respectivos órganos directivos.

Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución.

Los Ministros y Secretarios de Estado son nombrados de acuerdo con lo establecido en la legislación correspondiente.

Los titulares de los órganos directivos son nombrados, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, en la forma establecida en esta Ley, siendo de aplicación al desempeño de sus funciones:

- a) La responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarrollada.
- b) La sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o directivo competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley General Presupuestaria.

### **2.2.3. Elementos organizativos básicos.**

Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Las unidades comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas, que agrupen dos o más unidades menores.

Los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas asignadas a la misma.

Las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo, que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica, y se integran en un determinado órgano.

## **2.3. LOS MINISTERIOS Y SU ESTRUCTURA INTERNA.**

### **2.3.1. Los Ministerios.**

La Administración General del Estado se organiza en Ministerios, comprendiendo cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa.

La organización en Departamentos Ministeriales no obsta a la existencia de órganos superiores o directivos u organismos públicos no integrados o dependientes, respectivamente, de un Ministerio, que con carácter excepcional se adscriban a miembros del Gobierno distintos de los Ministros.

La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.

### **2.3.2. Organización interna de los Ministerios.**

En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado, y excepcionalmente Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban.

Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica para la gestión de los servicios comunes.

Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas.

Las Direcciones Generales se organizan en Subdirecciones Generales para la distribución de las competencias encomendadas a aquéllas, la realización de las actividades que les son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sin perjuicio de lo anterior, podrán adscribirse directamente Subdirecciones Generales a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio.

### **2.3.3. Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas.**

Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas.

Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por orden del Ministro respectivo, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas.

Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo.

#### **2.3.4. Ordenación jerárquica de los Órganos Ministeriales.**

Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado.

Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Subsecretario, Director general y Subdirector general.

Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario y los Secretarios generales técnicos tienen categoría de Director general.

#### **2.4. ÓRGANOS SUPERIORES DE LOS MINISTERIOS.**

##### **2.4.1. Los Ministros.**

###### *2.4.1.1. Estatuto personal.*

Su nombramiento corresponde al Rey a propuesta del Presidente del Gobierno.

Respecto a sus incompatibilidades y responsabilidad rige lo dicho respecto al Presidente del Gobierno (véase Tema 12).

###### *2.4.1.2. Funciones.*

Los Ministros, además de las atribuciones que les corresponden como miembros de Gobierno, dirigen, en cuanto titulares de un Departamento Ministerial, los sectores de actividad administrativa integrados en su Ministerio y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección.

Corresponde a los Ministros, en todo caso, ejercer las siguientes competencias:

- a) Ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en la legislación específica.
- b) Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes.
- c) Aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio, y de los presupuestos de los organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Economía y Hacienda.
- d) Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su Ministerio, de acuerdo con las competencias que le atribuye esta Ley.
- e) Evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte de los órganos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la actuación de dichos órganos y de los organismos públicos dependientes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria.

- f) Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los organismos públicos dependientes del mismo, cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros o al propio organismo, y elevar al Consejo de Ministros las propuestas de nombramiento a éste reservadas.
- g) Mantener las relaciones con las Comunidades Autónomas y convocar las Conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su Departamento.
- h) Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del Ministerio, impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias.
- i) Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así como plantear los que procedan con otros Ministerios.

Corresponden a los Ministros, sin perjuicio de su desconcentración o delegación en los órganos superiores o directivos del Ministerio o en los directivos de la organización territorial de la Administración General del Estado, las siguientes competencias:

1. Administrar los créditos para gastos de los presupuestos de su Ministerio. Aprobar y comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros y elevar a la aprobación de éste los que sean de su competencia, reconocer las obligaciones económicas, y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público.
2. Autorizar las modificaciones presupuestarias que les atribuye la Ley General Presupuestaria.
3. Celebrar, en el ámbito de su competencia, contratos y convenios, salvo que estos últimos correspondan al Consejo de Ministros.
4. Solicitar del Ministerio de Hacienda la afectación o el arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a su cargo. Estos bienes quedarán sujetos al régimen establecido en la legislación patrimonial correspondiente.
5. Proponer y ejecutar, en el ámbito de sus competencias, los planes de empleo del Ministerio y los organismos públicos de él dependientes.
6. Modificar la relación de puestos de trabajo del Ministerio que expresamente autoricen de forma conjunta los Ministerios de Administraciones Públicas y Hacienda.
7. Convocar las pruebas selectivas en relación al personal funcionario de los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio así como al personal laboral, de acuerdo con la correspondiente oferta de empleo público, y proveer los puestos de trabajo vacantes, conforme a los procedimientos establecidos al efecto y ajustándose al marco previamente fijado por el Ministerio de Administraciones Públicas.
8. Administrar los recursos humanos del Ministerio de acuerdo con la legislación específica en materia de personal. Fijar los criterios para la evaluación del personal y la distribución del complemento de productividad y de otros incentivos al rendimiento legalmente previstos.
9. Otorgar o proponer, en su caso, las recompensas que procedan y ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con las disposiciones vigentes.

10. Decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo que deba representar al Departamento.
11. Resolver los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les corresponda.
12. Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor.

Según el artículo 4.º de la LG, le compete:

- a) Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su Departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del Presidente del Gobierno.
- b) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.
- c) Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las Leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.
- d) Refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia.

#### **2.4.2. Los Secretarios de Estado.**

Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno.

Actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan. Cuando estén adscritos a la Presidencia del Gobierno, actúan bajo la dirección del Presidente. Asimismo, podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos Ministros la representación de éstos en materias propias de su competencia, incluidas aquéllas con proyección internacional, sin perjuicio, en todo caso, de las normas que rigen las relaciones de España con otros Estados y con las Organizaciones internacionales.

Las competencias de los Secretarios de Estado son las que se determinan en la LOFAGE.

##### *2.4.2.1. Estatuto personal.*

Aparecieron con el Decreto de 4 de julio de 1977 como figura intermedia entre el Ministro y el Subsecretario.

Son nombrados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro respectivo.

##### *2.4.2.2. Funciones.*

Los Secretarios de Estado dirigen y coordinan las Direcciones Generales situadas bajo su dependencia, y responden ante el Ministro de la ejecución de los objetivos fijados para la Secretaría de Estado. A tal fin les corresponde:



1. Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue el Ministro y desempeñar las relaciones externas de la Secretaría de Estado, salvo en los casos legalmente reservados al Ministro.
2. Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares.
3. Nombrar y separar a los Subdirectores generales de la Secretaría de Estado.
4. Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas competentes por razón de la materia.
5. Ejercer las competencias atribuidas al Ministro en materia de ejecución presupuestaria, con los límites que, en su caso, se establezcan por aquél.
6. Celebrar los contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado, y los convenios no reservados al Ministro del que dependan o al Consejo de Ministros.
7. Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos.
8. Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor.

## 2.5. ÓRGANOS DIRECTIVOS DE LOS MINISTERIOS.

### 2.5.1. Los Subsecretarios.

#### 2.5.1.1. *Nombramiento y cese.*

Por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, a los que se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.

#### 2.5.1.2. *Funciones.*

Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes y, en todo caso, las siguientes:

- a) Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio, a través del correspondiente asesoramiento técnico.
- b) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus organismos públicos.
- c) Establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio, así como determinar las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo, en el marco definido por el Ministerio de Administraciones Públicas.

- d) Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio.
- e) Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes de empleo y política de directivos del Ministerio y sus organismos públicos, así como en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación de los sistemas de información y comunicación.
- f) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del departamento.
- g) Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro en el desarrollo de las funciones que a éste le corresponden, y en particular en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquél, así como a los demás órganos del Ministerio.

En los mismos términos del párrafo anterior, informar las propuestas o proyectos de normas y actos de otros Ministerios, cuando reglamentariamente proceda.

A tales efectos, será responsable de coordinar las actuaciones correspondientes dentro del Ministerio, y en relación con los demás Ministerios que hayan de intervenir en el procedimiento.

- h) Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él.
- i) Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del Ministerio y a la representación ordinaria del mismo y las que les atribuyan la legislación en vigor.

## **2.5.2. Los Secretarios Generales.**

### **2.5.2.1. Nombramiento y cese.**

Por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. Tienen rango de Subsecretarios.

### **2.5.2.2. Funciones.**

Sobre un sector de actividad administrativa determinado que prevean las normas que regulen la estructura del Ministerio.

Ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes.

## **2.5.3. Los Secretarios Generales Técnicos.**

### **2.5.3.1. Nombramiento y cese.**

Por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Departamento entre funcionarios de carrera del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales, a los que se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.

Tienen la categoría de Director General.

#### *2.5.3.2. Funciones.*

Sobre servicios comunes que le atribuya el Decreto de estructura del Departamento, y en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones.

### **2.5.4. Los Directores Generales.**

#### *2.5.4.1. Nombramiento y cese.*

Igual que los Secretarios Generales Técnicos, excepto que el Decreto de estructura del Departamento permita, en razón a las características específicas de la Dirección General, que su titular no reúna la condición de funcionario.

#### *2.5.4.2. Funciones.*

Los Directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio. A tal efecto, les corresponde:

- a) Proponer los proyectos de su Dirección General para alcanzar los objetivos establecidos por el Ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento.
- b) Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección General y las que le sean desconcentradas o delegadas.
- c) Proponer, en los restantes casos, al Ministro o al titular del órgano del que dependa, la resolución que estime procedente sobre los asuntos que afectan al órgano directivo.
- d) Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del órgano directivo y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos.
- e) Las demás atribuciones que le confieran las Leyes y Reglamentos.

### **2.5.5. Los Subdirectores Generales.**

#### *2.5.5.1. Nombramiento y cese.*

Por el Ministro o Secretario de Estado del que dependan entre funcionarios de carrera de la Administración General del Estado, y en su caso, de otras Administraciones Públicas cuando así lo prevén las normas de aplicación y que pertenezcan a Cuerpos y Escalas a los que se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.

#### *2.5.5.2. Funciones.*

Los Subdirectores generales son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o acti-

vidades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la Subdirección General.

### **3. ÓRGANOS TERRITORIALES. LOS DELEGADOS Y SUBDELEGADOS DEL GOBIERNO.**

#### **3.1. LOS DELEGADOS DEL GOBIERNO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.**

##### **3.1.1. Nombramiento y cese.**

Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno y tendrán su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros determine otra cosa y sin perjuicio de lo que disponga, expresamente, el Estatuto de Autonomía.

##### **3.1.2. Sustitución.**

En caso de ausencia, vacante o enfermedad, el Delegado del Gobierno será suplido, temporalmente, por el Subdelegado del Gobierno de la provincia donde aquél tenga su sede, salvo que el Delegado designe a otro Subdelegado. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales, la suplencia corresponderá al titular del órgano responsable de los servicios comunes de la Delegación del Gobierno.

##### **3.1.3. Naturaleza.**

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas representan al Gobierno en el territorio de aquéllas sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las Comunidades Autónomas a través de sus respectivos presidentes. Ejercen la dirección y la supervisión de todos los servicios de la Administración General del Estado y sus organismos públicos situados en su territorio, en los términos de esta Ley.

##### **3.1.4. Dependencia.**

Los Delegados del Gobierno dependen de la Presidencia del Gobierno, correspondiendo al Ministro de Administraciones Públicas dictar las instrucciones precisas para la correcta coordinación de la Administración General del Estado en el territorio, y al Ministro del Interior, en el ámbito de las competencias del Estado, impartir las necesarias en materia de libertades públicas y seguridad ciudadana. Todo ello se entiende sin perjuicio de la competencia de los demás Ministros para dictar las instrucciones relativas a sus respectivas áreas de responsabilidad.

##### **3.1.5. Funciones.**

###### **A) Generales.**

Corresponde a los Delegados del Gobierno:

- a) Mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, con la de la Comunidad Autónoma y con las correspondientes Entidades locales.

- b) Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Realizará también estas funciones con las Entidades locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes.

Para el ejercicio de las funciones asignadas respecto de todos los servicios de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas tienen las siguientes competencias:

1. Dirigir la Delegación del Gobierno; nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias y dirigir y coordinar como superior jerárquico la actividad de aquéllos; impulsar y supervisar, con carácter general, la actividad de los restantes órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos en el territorio de la Comunidad Autónoma; e informar las propuestas de nombramiento de los titulares de órganos territoriales de la Administración General del Estado y los organismos públicos de ámbito autonómico y provincial, no integrados en la Delegación del Gobierno.
2. Formular a los Ministerios competentes, en cada caso, las propuestas que estime convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas que hayan de ejecutar los servicios territoriales y los de sus organismos públicos, e informar, regular y periódicamente, a los Ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales.
3. Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá al Delegado del Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.
4. Elevar, con carácter anual, un informe al Gobierno, a través del Ministro de Administraciones Públicas, sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales y su evaluación global.
5. Suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los órganos de la Delegación del Gobierno, cuando le corresponda resolver el recurso, y proponer la suspensión de los restantes actos, así como respecto de los actos impugnados dictados por los servicios no integrados en la Delegación del Gobierno.
6. Velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas, constitucionalmente, al Estado y la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo, según corresponda, conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes.
7. Ejercer las potestades sancionadoras, expropiatorias y cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas.

**B) En materia de información.**

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas coordinarán la información sobre los programas y actividades del Gobierno y la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma.

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas promoverán, igualmente, los mecanismos de colaboración con las restantes Administraciones Públicas en materia de información al ciudadano.

### C) Sobre simplificación de estructuras.

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas propondrán ante los órganos centrales competentes las medidas precisas para dar cumplimiento efectivo a lo previsto en el artículo 31, en relación con la organización de la Administración periférica del Estado.

Además, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas:

- a) Propondrán a los Ministerios de Administraciones Públicas y de Hacienda la elaboración de planes de empleo, la adecuación de las relaciones de puestos de trabajo y los criterios de aplicación de las retribuciones variables, en la forma que reglamentariamente se determine.
- b) Serán consultados en la elaboración de planes de empleo de la Administración General del Estado en su ámbito territorial y en la adopción de otras medidas de optimización de los recursos humanos, especialmente las que afecten a más de un Departamento.

### D) Dirección de los servicios territoriales integrados.

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas son los titulares de las correspondientes Delegaciones del Gobierno, dirigiendo, directamente o a través de los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los servicios territoriales ministeriales integrados en éstas, de acuerdo con los objetivos y, en su caso, instrucciones de los órganos superiores de los respectivos Ministerios.

Ejercen las competencias propias de los Ministerios en el territorio y gestionan los recursos asignados a los servicios integrados.

Estas facultades se han desarrollado en el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de Integración de los Servicios Periféricos y de Estructura de las Delegaciones del Gobierno.

### E) Relación con otras Administraciones territoriales.

Para el ejercicio de las funciones previstas en el apartado 2 del artículo 22, respecto de la Comunidad Autónoma de su territorio, a los Delegados del Gobierno les corresponde:

- a) Participar en las Comisiones mixtas de transferencias y en las Comisiones bilaterales de cooperación, así como en otros órganos de cooperación de naturaleza similar cuando se determine.
- b) Promover la celebración de convenios de colaboración y cualesquiera otros mecanismos de cooperación de la Administración General del Estado con la Comunidad Autónoma, participando, en su caso, en el seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los mismos.

En relación con las Entidades locales, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas podrán promover, en el marco de las necesarias relaciones de cooperación con la respectiva Comunidad Autónoma, la celebración de convenios de colaboración, en particular, en relación a los programas de financiación estatal.

### 3.1.6. Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno

Para el mejor cumplimiento de la función directiva y coordinadora que le compete al Delegado del Gobierno, se crea en cada una de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales una Comisión Te-

ritorial, presidida por el Delegado del Gobierno, e integrada por los Subdelegados del Gobierno de las provincias comprendidas en el territorio de ésta; en las de las islas Baleares y Canarias se integrarán, además, los directorios insulares.

Esta Comisión desarrollará, en todo caso, las siguientes funciones:

- a) Coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse de forma homogénea en el ámbito de la Comunidad Autónoma, para asegurar el cumplimiento de los objetivos generales fijados por el Gobierno a los servicios territoriales.
- b) Asesorar al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma en la elaboración de las propuestas de simplificación administrativa y racionalización en la utilización de los recursos a que se refiere el artículo 25 de la LOFAGE.
- c) Cualesquiera otras que a juicio del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma resulten adecuadas para que la Comisión territorial cumpla la finalidad de apoyo y asesoramiento en el ejercicio de las competencias que la LOFAGE le asigna.

### 3.2. LOS SUBDELEGADOS DEL GOBIERNO.

#### 3.2.1. Nombramiento y cese.

En cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado de Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma, existirá un Subdelegado del Gobierno, que será nombrado por aquél por el procedimiento de libre designación, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, a los que se exija, para su ingreso, el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.

En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado, el Delegado del Gobierno asumirá las competencias que la LOFAGE atribuye a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.

Por Real Decreto podrán crearse Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, y para ello habrán de tenerse en cuenta circunstancias tales como la población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas.

#### 3.2.2. Funciones.

A los Subdelegados del Gobierno les corresponde:

- a) Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la Administración General del Estado, de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno.
- b) Impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados.
- c) Desempeñar, en los términos del apartado 2 del artículo 22 de la LOFAGE, las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con las Corporaciones Locales y, en particular, informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal.

d) Mantener, por iniciativa y de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, relaciones de comunicación, cooperación y colaboración con los órganos territoriales de la Administración de la respectiva Comunidad Autónoma que tenga su sede en el territorio provincial.

e) Ejercer las competencias sancionadoras que se les atribuyan normativamente.

En las provincias en las que no radique la sede de las Delegaciones del Gobierno, el Subdelegado del Gobierno, bajo la dirección y la supervisión del Delegado del Gobierno, ejercerá las siguientes competencias:

a) La protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia.

b) La dirección y la coordinación de la protección civil en el ámbito de la provincia.

En la provincia en la que radique la sede de la Delegación del Gobierno, los Subdelegados del Gobierno podrán ejercer las anteriores competencias, previa delegación del Delegado del Gobierno, y en todo caso bajo la dirección y supervisión del mismo.

### **3.3. LOS DIRECTORES INSULARES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.**

#### **3.3.1. Lugar.**

Existirán en las islas de Menorca, Ibiza-Formentera, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera.

#### **3.3.2. Dependencia.**

Dependen jerárquicamente del Delegado de Gobierno de la Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista.

#### **3.3.3. Nombramiento y cese.**

Por resolución del Delegado del Gobierno que se publicará en el BOE. El procedimiento será de libre designación, a propuesta del Subdelegado del Gobierno, si existe en la provincia, entre funcionarios de carrera de las Administraciones Públicas, a los que se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado, Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario o equivalente.

#### **3.3.4. Competencias.**

Ejercen en la provincia las competencias de los Subdelegados del Gobierno, y aquellas otras que le sean desconcentradas o delegadas.

En todo caso, el régimen jurídico de los Subdelegados y Directores Insulares se encuentra desarrollado en el Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares de la Administración General del Estado.



### 3.4. ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PERIFÉRICOS.

#### 3.4.1. Simplificación de los servicios periféricos.

La LOFAGE, en relación con la Administración periférica del Estado, pretende lograr una simplificación como consecuencia fundamentalmente de la configuración del Estado autonómico y la necesidad de evitar duplicidades de estructuras administrativas, tanto en la propia Administración General del Estado como con otras Administraciones Públicas, y, en consecuencia, prevé una reestructuración de aquélla, en lo que se refiere fundamentalmente a los servicios periféricos de los diferentes Departamentos Ministeriales.

En todo caso, la integración de los servicios periféricos y, en general, la reordenación de los mismos, se ha efectuado mediante el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto.

#### 3.4.2. Estructura de las Delegaciones del Gobierno y de las Subdelegaciones del Gobierno.

Las Delegaciones del Gobierno se adscriben orgánicamente al Ministerio de Administraciones Públicas.

Las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias se constituyen en órganos de la respectiva Delegación del Gobierno.

La organización de las Delegaciones atenderá a los siguientes criterios:

- a) Existirán áreas funcionales para gestionar los servicios que se integren en la Delegación, mantener la relación inmediata con los servicios no integrados y asesorar en los asuntos correspondientes a cada área.
- b) El número de dichas áreas se fijará en atención a los diversos sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa y atendiendo al volumen de los servicios que desarrolle la Administración General del Estado en cada Comunidad Autónoma, al número de provincias de la Comunidad y a otras circunstancias en presencia que puedan aconsejar criterios de agrupación de distintas áreas bajo un mismo responsable, atendiendo especialmente al proceso de transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas.
- c) Existirá un órgano para la gestión de los servicios comunes de la Delegación, incluyendo los de los servicios integrados.

La estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se establecerá por Real Decreto del Consejo de Ministros en el que se determinarán los órganos y las áreas funcionales que se constituyan.

La estructuración de las áreas funcionales se llevará a cabo a través de las relaciones de puestos de trabajo, que se aprobarán a iniciativa del Delegado del Gobierno.

#### 3.4.3. Criterios sobre integración de servicios.

Se integrarán en las Delegaciones del Gobierno todos los servicios territoriales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, salvo aquellos casos en que por las singularidades

de sus funciones o por el volumen de gestión resulte aconsejable su dependencia directa de los órganos centrales correspondientes, en aras de una mayor eficacia en su actuación.

Los servicios integrados se adscribirán, atendiendo al ámbito territorial en que deban prestarse, a la Delegación del Gobierno o a la Subdelegación correspondiente.

#### **3.4.4. Criterios sobre organización de servicios no integrados y dependencia de éstos.**

Los servicios no integrados se organizan territorialmente atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines y a la naturaleza de las funciones que deban desempeñar.

La organización de dichos servicios se establecerá por Real Decreto a propuesta conjunta del Ministro correspondiente y del Ministro de Administraciones Públicas, cuando contemple unidades con nivel de Subdirección General o equivalentes, o por Orden conjunta cuando afecte a órganos inferiores.

Los servicios no integrados dependerán del órgano central competente sobre el sector de actividad en el que aquéllos operen, el cual les fijará los objetivos concretos de actuación y controlará su ejecución, así como el funcionamiento de los servicios. Los titulares de los servicios estarán especialmente obligados a prestar toda la colaboración que precisen los Delegados del Gobierno y los Subdelegados del Gobierno para facilitar la dirección efectiva del funcionamiento de los servicios estatales.

